

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MANUEL HORACIO GOMÉZ GUTIÉRREZ
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00192-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Reliquidación Pensional – Mesada 14 (Acto Legislativo 01 de 2005)
DECISIÓN	Confirma

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, este asunto se tramita conforme al procedimiento de sentencia escrita en segunda instancia, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro

del presente proceso, promovido por el señor **MANUEL HORACIO GOMÉZ GUTIERREZ** en contra de **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 035**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación que formuló el apoderado judicial del demandante, contra la sentencia que profirió el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 4 de febrero de 2020, que resultó completamente adversa a sus intereses.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el asegurado, que nació el 9 de octubre de 1953 por lo que cumplió los 60 años de edad en el año 2013, contaba con 40 años cumplidos para el 1º de abril de 1994 y es beneficiario del régimen de transición pensional.

Informó que COLPENSIONES le reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución GNR 13702 del 16 de enero de 2014, en cuantía mensual de \$853.901, sin reconocerle la mesada 14 y omitiendo pagar debidamente el retroactivo correspondiente.

Adujo que el último salario que devengó como trabajador dependiente en la empresa IDEACE S.A., ascendió a \$1.001.000, por lo que estima que la mesada pensional reconocida no corresponde a este salario, estimando que le asiste derecho a la reliquidación pensional, ya que el asegurado cuenta con un exceso de más de 1,000 semanas sobre las mínimas requeridas.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare que al señor MANUEL HORACIO GÓMEZ GUTIERREZ, en aplicación del régimen de transición pensional, le asiste derecho a la reliquidación de su mesada pensional teniendo en cuenta el último salario devengado, que ascendió a \$1.001.000, con un IBL del 90%, aplicando la condición más beneficiosa que consulte su favorabilidad y que, en consecuencia, se condene a COLPENSIONES, a pagarle retroactivamente la pensión de vejez con las respectivas mesadas adicionales de junio y diciembre, la inclusión de la mesada 14 en lo sucesivo, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1994, la indexación de las sumas objeto de condena, lo que ultra y extra petita se encuentre probado y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

La demanda fue admitida y notificada a la entidad demandada.

COLPENSIONES contestó la demanda a través de escrito visible a folios 24 y siguientes del expediente, aceptando el status de pensionado del actor, las condiciones laborales que narró sobre la última relación laboral sostenida y las condiciones de beneficiario del régimen de transición pensional bajo las cuales se le otorgó la pensión de vejez; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y; formuló las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR RELIQUIDACIÓN PENSIONAL, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y COMPENSACIÓN”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 4 de febrero de 2020, el Juez de conocimiento, absolvió a la entidad demandada todas las pretensiones de la

demanda, imponiendo al actor condena en costas en favor de Colpensiones por valor de \$100.000.

En punto de la reliquidación pensional del IBL con base al último salario mensual devengado argumentó que la entidad demandada liquidó correctamente la pensión de vejez del actor aplicándole el IBL más favorable de conformidad al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 al cual le designó una tasa de reemplazo del 90% como beneficiario del régimen de transición pensional.

Precisó que el IBL no constituye un elemento de la transición que deba conservarse, ya que esta solo se limitó a edad, tiempo y monto, destacando a su vez que, la fórmula solicitada en la demanda por el actor, conforme a la cual pretende que se calcule el mismo acogiendo el último salario mensual devengado no fue dispuesta por el legislador en ninguna norma.

Con relación a la pretendida Mesada 14, encontró que, conforme a lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta que el actor cumplió los 60 años de edad en el año 2013, quedó excluido del beneficio de dicha mesada, correspondiéndole disfrutar de su derecho sobre 13 mesadas pensionales al año.

Argumentó la imposibilidad de excepcionar la aplicación de una norma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2005) para aplicar una disposición legal (la Mesada 14).

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el apoderado judicial del señor MANUEL HORACIO GÓMEZ GUTIERREZ, quien llamó la atención de este colegiado, a fin que se revoque la sentencia de primera instancia, por desconocer los derechos del demandante.

Explicó que, el régimen de transición es un derecho especial que debe garantizársele al demandante, quien es una persona de la tercera edad que financió al sistema pensional con una amplia densidad de cotizaciones (más de 2,000), que le está regalando al sistema más de 1.000 semanas y de manera injusta lo están privando del disfrute de la Mesada 14.

Indicó que el Acto Legislativo 01 de 2005, más que una reforma pensional, constituye una reforma política, que desconoce los derechos que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido en materia pensional, y, establece normas regresivas y desfavorables.

Insistió en que al actor debe aplicársele la norma pensional más favorable, debiendo revisársele la forma en que se liquidó su pensión, a efectos de determinar la prestación en los términos que le resulten más convenientes.

Puso de presente que Colpensiones ha actuado de mala fe, ya que el asegurado se vio obligado a acudir a una demanda en los juzgados de pequeñas causas para que se le reconociera el retroactivo pensional adeudado, ante el retardo y omisión en que incurrió la entidad pagadora de la pensión.

Solicitó también que se revoque la condena en costas procesales que le fue impuesta al señor GOMEZ GUTIERREZ en primera instancia, al tratarse de una condena que afecta sus condiciones básicas.

Alegatos de conclusión:

En la oportunidad procesal, el apoderado judicial de COLPENSIONES presentó alegaciones de segunda instancia.

A través de las mismas solicitó a este colegiado confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia, reiterando lo expresado en la respuesta a la demanda y los alegatos de conclusión, en el sentido que la entidad aplicó al demandante las condiciones que le resultaban más favorables como beneficiario del régimen de transición pensional.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- Reliquidación pensional por IBL, de beneficiario del régimen de transición (Artículo 36 Ley 100 de 1993 – Decreto 758 de 1990 y Artículo 21 de la Ley 100 de 1993) – Mesada 14 Aplicabilidad del Acto Legislativo 01 de 2005.

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por el apoderado judicial del señor MANUEL HORACIO GÓMEZ GUTIERREZ en el recurso de alzada, lo que comprende determinar, *si tal y como lo hace ver*, al actor le asiste derecho a que el IBL de su pensión se calcule con base al último salario mensual devengado, aplicando una tasa del reemplazo del 90% sobre el mismo y, si hay lugar a reconocerle la Mesada 14.

Pasará la sala a resolver cada uno de los dos problemas jurídicos que comprende esta Litis:

El IBL en transición pensional.

El régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, contemplado en el artículo 36 de dicha normativa, se erige en un mecanismo de protección a las expectativas legítimas de los asegurados al sistema pensional que tenían

cercana una idea de pensionarse con el régimen anterior al que introdujo el sistema general de pensiones que entró a regir el 1º de abril de 1994.

Empero, el beneficio de la transición se limitó a la conservación de los elementos edad, tiempo y monto de la prestación pensional, sin extenderse al IBL, el cual se reguló íntegramente por la Ley 100 de 1993.

Entre otras, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de febrero de 2018, Radicado 52.594, precisó:

“Para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo conservó a sus beneficiarios lo relativo a la edad, tiempo de servicios y monto porcentual de la prestación. Por tanto, los demás aspectos del régimen pensional, incluido el IBL, quedaron sometidos a la nueva legislación en materia de seguridad social, especialmente, a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 ibídem. Esto se justifica, según dicho Tribunal, en que el concepto de monto hace referencia únicamente al porcentaje que se aplica y no a la base reguladora de la pensión o a los ingresos en los que esta se fundamenta. Tal postura, se dice, no vulnera el principio de inescindibilidad normativa, debido a que fue el legislador el que dispuso que la norma en comento se aplicara de esa manera”.

Para dicha corporación, aspectos como el IBL de la prestación, y las condiciones de disfrute pensional, se rigen por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y las normas integradas a dicho estatuto (Sentencias de Casación CSJ SL, 23 abr. 2003, rad. N° 19459; reiterada en las CSJ SL, 24 jul. 2012, rad. N° 44980; CSJ SL, 16 oct. 2012, rad. N° 43708; en la CSJ SL16827-2015, CSJ SL 8337-2016 y SL2689 de 2017, entre otras)¹.

¹ “Así, frente al primero de los cuestionamientos se ha de precisar que la Corporación tiene establecido el criterio relativo a que el régimen de transición garantiza a sus beneficiarios, de cara a la prestación por vejez o jubilación y en relación con la normativa que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho y el monto de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige, en principio, por lo previsto por el legislador en el inc. 3º del art. 36 de la L. 100/1993, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y que sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.

(...)

Esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 37036, entre otras muchas, reiterada en la CSJ SL8451-2014, ha mantenido esa interpretación”.

Esta posición es uniforme y pacífica en la Corte Constitucional (Sentencia SU 013 de 2018).

El Consejo de Estado, luego de haber sostenido por varios años la postura que asimilaba que el Ingreso Base de Liquidación hacía parte del monto, llevándolo a darle una inteligencia de ultractividad a los IBL que regulaban distintas normas pensionales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (Sentencias del 21 de septiembre de 2000, Expediente 470-99 y Sección Segunda, Expediente 112-2009), recogió su postura mediante auto del 29 de agosto de 2017, a través del cual avocó conocimiento del proceso ordinario con número de expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, con el objetivo de unificar su jurisprudencia sobre *“la interpretación que se ha dado al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dentro del régimen de transición”*. Y concluyó que *“esta diferencia de interpretaciones entre ambas Cortes, evidencia, precisamente, la necesidad de que sea la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la que examine la línea jurisprudencial, tanto de la Corte Constitucional como la de la Sección Segunda de esta Corporación en la materia en cuestión, y asuma la postura que deba guiar no solo a la jurisdicción contenciosa administrativa del país sino las decisiones administrativas en materia pensional del régimen de transición. Que con los pronunciamientos de unos y otros se adquiriera la seguridad que están acatando el precedente vertical y que aún en sede de tutela será respaldado por este órgano de cierre”*.

Ahora, el criterio que permite diferenciar a quienes se aplica el artículo 21 o el inciso 3º del artículo 3º de la ley 100 de 1993, parte del cálculo de saber si al asegurado le faltaban –a la entrada en vigencia de la ley de seguridad social– más o menos de 10 años para adquirir el derecho.

El artículo 21 de la Ley 100 de 1993, establece:

“Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere

inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo”.

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

Caso Concreto:

En el presente caso, no existe ninguna duda que el señor MANUEL HORACIO GOMEZ GUTIERREZ cumplió 60 años de edad el 9 de octubre de 2013, y alcanzó a reunir, al 30 de septiembre de 2013, una densidad superior a las 2,000 semanas cotizadas (fl. 7 vuelto), lo cual le valió el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, a través de la Resolución Nro. GNR 13702 del 16 de enero de 2014 (fl. 12), como beneficiario del régimen de transición pensional, a partir del 1º de febrero de 2014, con un IBL de \$948.845, al que se aplicó una tasa de reemplazo del 90%, para entrar a disfrutar de una mesada pensional primigenia de \$853.961.

Las referidas condiciones pensionales fueron posteriormente mejoradas mediante orden judicial que le permitió acceder al actor a una fecha de disfrute anterior de la prestación.

A efectos de desatar la alzada formulada por el apoderado judicial del actor en contra de los razonamientos del A quo por no haber accedido a reliquidar la pensión del demandante con un IBL equivalente al último salario mensual devengado, debe destacar esta sala que no le asiste razón al recurrente. En primer lugar, es inobjetable que, conforme a las disposiciones legales, es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y no ninguna otra disposición la que gobierna la situación pensional del señor GOMEZ GUTIERREZ, ya que se encuentra inmerso dentro de la hipótesis legal que para el cálculo del IBL refiere

la norma, tal y como se reseñó en precedencia, al ser de aquellos asegurados que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 les faltaban más de 10 años para adquirir el derecho pensional, sin que su condición de beneficiario del régimen de transición pensional le permita acceder a una normativa distinta, en tanto el IBL, entendido como promedio y no como tasa de reemplazo, se regula bajo la ley de seguridad social y no por las leyes anteriores que solo permiten la aplicación de edad-tiempo y monto. En segundo lugar, la aspiración del actor a un IBL *Ad hoc*, preciso y determinado para su propio caso, que contemple la aplicación directa del último salario mensual percibido, es una pretensión que no tiene ningún sustento legal ni jurisprudencial.

Ninguna regla de favorabilidad o de progresividad normativa permitiría a la judicatura acceder a una IBL en esas condiciones. Al contrario, ello atentaría contra la seguridad jurídica que establecen las normas legales, constituiría una regla que contrariaría el principio de igualdad y colocaría al operador jurídico en el pleno de la ilegalidad, al emplear cálculos para obtener la mesada pensional por fuera de los dictados del legislador.

El apoderado judicial recurrente se duele que al actor no se le haya aplicado la norma más favorable, por contar con una densidad de cotizaciones que prácticamente dobla en cantidad las mínimas exigidas por la ley para acceder a la pensión de vejez; sin embargo, ello no es de recibo, ya que las personas cotizan al sistema pensional como una obligación derivada del mantenimiento de relaciones laborales que deben cumplir con esas contribuciones al sistema.

La dinámica pensional en una régimen de reparto como el de prima media administrado por Colpensiones se apoya en las contribuciones al fondo común con el reconocimiento de las prestaciones económicas una vez se cumplen los requisitos legales, sin entrar a variar esas condiciones por el hecho de que una persona supere en mayor o menor medida el número de semanas exigidas por la Ley.

Al actor se le reconoció la pensión de vejez aplicándole las condiciones del régimen anterior contenidas en el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 90% y acogiendo el ingreso base de liquidación que le resultaba más favorable.

En consecuencia, sin que se advierte que Colpensiones haya incurrido en dislate alguno en el cálculo de la prestación por vejez del actor y sin que haya derechos ultra y extra petita qué reconocer al señor Gómez Gutiérrez, esta sala **confirmará** la absolución por la reliquidación, por ser una pretensión que adolece de cualquier sustento legal.

La Mesada 14:

El inciso 8º del Acto Legislativo 01 de 2005, establece:

“Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

Esa misma disposición constitucional, exceptuó de la aplicación de la anterior regla a determinado grupo de asegurados, imponiendo límite temporal al beneficio, en los siguientes términos:

"Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año”.

Tanto la Corte Constitucional², como el órgano de cierre de esta jurisdicción (SL1347 de 2019), han dado aplicación a las condiciones establecidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, como norma superior, vigente, ajustada al ordenamiento jurídico y a la temporalidad de los regímenes de transición, e imposible de inaplicar. Para la Sala de Casación Laboral, *“aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos adquiridos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores”* (SL1347 de 2019).

No puede perderse de vista que el Acto Legislativo 01 de 2005 constituye una reforma a la propia carta política, por lo que su fuerza normativa y egida se extiende sobre toda la legislación nacional sobre la seguridad social. Dicho acto legislativo, elevó a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Sentencia CSJ SL4285-2018), garantizó los derechos adquiridos, y limitó razonablemente el régimen de transición pensional, el cual no podría entenderse como un derecho ilimitado en el tiempo, ya que su finalidad fue garantizar los derechos a normas anteriores a la Ley 100 de 1993, a determinado colectivo de ciudadanos colombianos que tenían ya consolidada ampliamente una expectativa legítima frente a las disposiciones que regularían su derecho pensional (Sentencia CSJ SL5110-2018).

Caso Concreto:

² La reforma constitucional introducida por el Congreso de la República a través del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció la exigencia de las 750 semanas cotizadas a su entrada en vigencia, para que los asegurados conservaren el beneficio de la transición hasta el 2014, ha sido abordada por la Corte Constitucional en varias oportunidades. En la Sentencia C-740/06, la Corte Constitucional dijo que no le era posible ejercer el control de constitucionalidad de un AL por su contenido material, por lo que se ha declarado inhibida para proferir fallo de mérito por ineptitud sustancial de la demanda al considerar que los ataques contra la disposición constitucional implican un análisis de tipo material y no formal, consideraciones similares a las que vertió en la S C-178/2007; resaltándose además que en SC-228 de 2011, se encontró que el citado acto legislativo ajustado a la Carta Política no evidenciaba vicio o irregularidad que atentara contra los principios constitucionales y los derechos adquiridos.

Se encuentra probado en el expediente (fl. 18), que el señor MANUEL HORACIO GOMEZ GUTIERREZ nació el 9 de octubre de 1953, por lo que cumplió los 60 años de edad el 9 de octubre de 2013. Su última cotización la realizó el sistema pensional en el ciclo septiembre de 2013 (fl. 42 vuelto), alcanzando a reunir un total de 2,109,43 semanas de cotización.

Significa lo anterior que, el último de los requisitos pensionales cumplidos por el actor fue la edad, ya que para ese momento (9 de octubre de 2013), tenía ya desde hacía aproximadamente 10 años reunidas las 1,000 semanas que requería para pensionarse.

De lo anterior puede concluirse que el derecho se causó en octubre de 2013 con el arribó a la edad de 60 años, no antes.

En consecuencia, de conformidad a la norma constitucional referida, al haberse causado la pensión con posterioridad al 31 de julio de 2011, es intrascendente que la mesada pensional sea inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y resulta claro que al actor no le asiste derecho a la mesada pensiona 14, sino que su derecho debe reconocerse sobre 13 mesadas pensional, tal como lo reconoció Colpensiones.

Los argumentos de aplicabilidad de la norma constitucional y su imposibilidad de excepcionarla, aducidos por el A quo, consultan las reglas jurisprudenciales vigentes y son consecuentes con la aplicación correcta de las categorías normativas.

En consecuencia, **se confirmará** igualmente la absolución de primera instancia sobre la Mesada 14.

Finalmente, con relación al inconformismo de la activa con la condena en costas procesales de primera instancia que le fue impuesta, esta sala no accederá a los pedimentos del recurrente, ya que el A quo dio aplicación al criterio objetivo que establece el artículo 365 del CGP, el cual es consecuente

con el hecho de que el actor haya sido vencido en juicio, y por ello deba pagar las costas procesales a Colpensiones.

Costas Procesales en las instancias:

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo del señor MANUEL HORACIO GÓMEZ GUTIERREZ y en favor de COLPENSIONES, por haber resultado vencido en el recurso de alzada, las cuales se imponen de conformidad al criterio objetivo del artículo 365 del CGP. Agencias en derecho: medio salario mínimo legal mensual vigente para 2021.

Sin más asuntos que resolver, pasa la Sala a proferir la decisión de segunda instancia.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS PROCESALES de segunda instancia al señor **MANUEL HORACIO GÓMEZ GUTIERREZ**, por haber resultado vencido en el recurso. Agencias en derecho: Medio Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2021, de conformidad a lo expuesto.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 125 del 19 de julio de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>